



Decimotercera Conferencia Regional sobre la Mujer
de América Latina y el Caribe

Montevideo, 25 a 28 de octubre de 2016

INFORME GUATEMALA

Informe Guatemala

Proceso preparatorio XIII Conferencia Regional sobre Mujer de América Latina y el Caribe

Guatemala, octubre 2016

En Guatemala, a partir de finales de los años 80's y principios de los años 90's, se impulsan acciones orientadas al fortalecimiento e institucionalización de marcos políticos y legales vinculados con el desarrollo y derechos de las mujeres, observándose en la última década avances sustantivos tanto a nivel de políticas y mecanismos, como en herramientas para la gestión pública de las mismas. Además, se tomó en consideración el compromiso por reafirmar objetivos fundamentales para alcanzar el desarrollo.

El país se caracteriza por ser un país multicultural y plurilingüe, en el que el 51.0% de la población es mujer (INE, 2002). Alcanzar condiciones de igualdad y equidad entre hombres y mujeres requiere atender los distintos desafíos y condiciones estructurales que limitan el empoderamiento y autonomía de las mujeres.

En este marco, entre las principales problemáticas que se enfrentan en el país para garantizar la equidad se encuentra **la violencia contra las mujeres** en los ámbitos político, económico, social, cultural y legal; y, que se combina con la débil aplicación de la justicia de forma objetiva, cuando se trata de agresiones, embarazos en niñas y adolescentes, trata de personas y muertes violentas; a pesar de los avances en el marco jurídico en el reconocimiento de distintas formas de violencia y el delito de *femicidio*. Estos factores están relacionados con patrones culturales que perpetúan discriminaciones y exclusiones. Cabe resaltar que dicha problemática se intensifica en contextos de pobreza, en el área rural y con población indígena, situaciones sociales que derivan muchas veces de un limitado acceso a educación, una dependencia económica y una reducida participación de las mujeres en el ámbito público y de toma de decisión.

Otra de las aristas fundamentales para el desarrollo integral de las mujeres lo constituye la **autonomía económica**, misma que se presenta con desafíos que conllevan limitantes para el acceso a un trabajo remunerado en sectores no agrícolas, a un trabajo digno y decente, al reconocimiento del trabajo doméstico¹ y al trabajo no remunerado, especialmente el asociado con la reproducción y el cuidado, tanto dentro del hogar como del ámbito comunitario.

¹ Aquel que se realiza en o para un hogar u hogares y establece una relación laboral.

De tal cuenta, se observa una menor participación de las mujeres en el mercado laboral (39.8%) frente a la participación de los hombres (82.8%) (Segeplan, 2015), participación que se evidencia principalmente en el sector de servicios y manufactura, así como a través de empresas familiares o cuenta propia, elementos que vulneran la posibilidad de contar con relaciones contractuales formales, una adecuada protección social y una remuneración salarial con equidad. Asimismo, el impacto estructural de la desigualdad socioeconómica y su dependencia repercute en el incremento de los índices de pobreza.

En este marco, se han desarrollado en el país, estrategias para medir la aportación de las mujeres a través de la cuenta nacional que corresponde al trabajo no remunerado (Cuenta Satélite), el cual representó el 18.9% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2011 (Segeplan, 2015); se han promovido actividades permanentes de capacitación y asesoría, se han impulsado estrategias crediticias y fortalecimiento a la micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) y se han impulsado lineamientos que se fundamentan en que la equidad debe ser un eje transversal a la gestión pública para cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, con enfoque territorial.

Las problemáticas anteriormente esbozadas, son desafíos compartidos por la región Centroamericana y el Caribe, elemento que ha incidido en la necesidad de establecer acuerdos como bloque y una agenda de acción común, en la búsqueda de mejores condiciones para la equidad. De tal cuenta, tanto a nivel regional como nacional, se han establecido estrategias para el fortalecimiento de la institucionalización y armonización de tratados y compromisos nacionales e internacionales asociados a las mujeres. En Centroamérica, en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), se cuenta con el Consejo de Ministras de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA) y con la **Política Regional de Igualdad y Equidad de Género (PRIEG)**.

A nivel nacional, se cuenta con la **Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) y el Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023**, la cual fue construida de forma participativa y fue consensuada con organizaciones de sociedad civil, condición que ha permitido la apropiación de la Política y su permanencia en los diferentes períodos de gobierno. Además, la Secretaría Presidencial de la Mujer, ente rector al más alto nivel de políticas públicas a favor del desarrollo integral de las mujeres de Guatemala, es la encargada del seguimiento a la implementación de la PNPDIM dentro de las entidades del gobierno central y gobiernos locales, así como de brindar acompañamiento técnico para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, planes y programas nacionales. Actualmente, se cuenta con 36

Unidades de Género en el Ejecutivo y con 227 Oficinas Municipales de la Mujer, además se han firmado 58 políticas municipales de seguridad con equidad.

Promover el desarrollo social, económico y político de los países, conlleva reducir los índices de desigualdad, así como garantizar condiciones estructurales para alcanzar una equidad entre hombres y mujeres. De tal cuenta, el país está comprometido con la armonización y alineación de la gestión por políticas públicas, que responda a las necesidades, demandas y prioridades de desarrollo del país, entre las que se insertan la PNPDIM y la Política General de Gobierno. En este sentido, el Estado, como garante del acceso del derecho al desarrollo, y con la finalidad de generar un desarrollo humano sostenible, definió hace dos años las prioridades nacionales, temas en los cuales, la gestión pública debe focalizar sus intervenciones.

Para el efecto, se construyó el **Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032**, en el marco del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y la **Política Nacional de Desarrollo**, instrumentos que establecen los lineamientos estratégicos, metas y resultados que deben alcanzarse al año 2032, identificándose 5 ejes prioritarios: A) Guatemala urbana y rural, B) Bienestar para la gente, C) Riqueza para todas y todos, D) Recursos naturales para hoy y para el futuro, E) Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.

Dichos lineamientos se fundamentan en que la equidad debe ser un eje transversal a la gestión pública para cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, étnicas y entre territorios. Por tanto, la violencia contra las mujeres, el femicidio y el empoderamiento económico de las mujeres, no quedan excluidos de estos instrumentos. Su implementación contempla a su vez el fortalecimiento a la participación de las mujeres a través de la Comisión de la Mujer del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural.

Como se indicó anteriormente, aún existen desafíos por cerrar las brechas de desigualdad, que posicionan a las mujeres en una situación de vulnerabilidad, la que se acentúa más en áreas rurales y grupos indígenas. Es imperante que el país, retome la gestión de la PNPDIM en el marco de la planificación para el desarrollo, y alinearla a las prioridades nacionales e internacionales, que como Estado se definieron y consensuaron. Sobre esta base, deberá priorizarse el fortalecimiento de la institucionalidad pública que sea capaz de generar las condiciones y brindar respuesta a las demandas que se relacionan a la garantía de derechos y desarrollo de las mujeres.